



Informe Internacional sobre Libertad Religiosa 2005

El Informe Internacional sobre Libertad Religiosa 2005 es presentado al Congreso por el Departamento de Estado en cumplimiento de la Sección 102(b) de la Ley de la Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998.

**Dirección de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Noviembre 2005**

Argentina

La Constitución estipula la libertad religiosa y el gobierno generalmente respeta este derecho en la práctica. Sin embargo, la Constitución establece que el Gobierno Federal “sostiene el culto católico apostólico romano” y el gobierno le otorga algunos privilegios que no poseen otras religiones o cultos.

No hubo ningún cambio en cuanto al respeto de la libertad religiosa durante el período que abarca el presente informe, y la política gubernamental continuó contribuyendo a la práctica generalmente libre de la religión.

La libertad religiosa se vio favorecida por la relación generalmente amistosa entre las religiones existentes en la sociedad. No obstante, continuaron evidenciándose episodios de discriminación, incluidos los incidentes contra judíos y musulmanes. Se han tomado una serie de medidas gubernamentales y no gubernamentales para reducir la discriminación y promover el entendimiento entre las personas de diferentes religiones.

El Gobierno de los Estados Unidos analiza las cuestiones de libertad religiosa con el gobierno argentino como parte de su política general de promover los derechos humanos.

Sección 1. Demografía religiosa.

La superficie del país es de 2.766.889 kilómetros cuadrados, y la población es de aproximadamente 37 millones, de acuerdo al censo más reciente llevado a cabo en el año 2001. El gobierno no recopila información sobre la afiliación religiosa. Es difícil obtener cálculos exactos de la afiliación religiosa en el país; sin embargo, de la información provista por el Registro Nacional de Cultos y representantes de diversos credos, así como también según estadísticas de organizaciones no gubernamentales (ONGs), surgen las siguientes

estimaciones, las cuales no implican necesariamente la práctica activa de la religión: católicos, 70% de la población; protestantes, 9%; musulmanes, 1,5%; judíos, 0,8%; otras religiones 2,5%; y el resto de la población sin afiliación religiosa declarada. A menudo, las estimaciones disponibles se basan en datos estadísticos desactualizados y presunciones cuestionables. A pesar de que existe la presunción de que los oriundos del Medio Oriente son musulmanes, las estimaciones del Centro Islámico de Argentina indican que solo uno de tres inmigrantes del Medio Oriente es musulmán, especialmente aquéllos de origen sirio o libanés, mientras que la mayoría es católica ortodoxa. Se estima un total de aproximadamente 500.000 a 600.000 musulmanes en la Argentina. Dentro del conjunto de inmigrantes del Medio Oriente también se incluye un pequeño grupo menonita y melquita.

Sección II. Situación de la libertad religiosa.

Marco jurídico y normativo

La constitución estipula la libertad religiosa y, en la práctica, el gobierno suele respetar este derecho. En todos los niveles, el gobierno se esfuerza por proteger plenamente este derecho y no tolera su abuso, ya sea por funcionarios públicos o por particulares. La Constitución otorga a todos los residentes el derecho a “profesar libremente su culto” y estipula que los extranjeros gocen de todos los derechos civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a “ejercer libremente su culto”.

La Constitución establece que el Gobierno Federal “sostiene el culto católico apostólico romano” y el gobierno concede a la Iglesia Católica una serie de subsidios. La Secretaría de Culto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto está a cargo de las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica, las iglesias cristianas no católicas y otras organizaciones religiosas del país.

La Secretaría de Culto mantiene un Registro Nacional de aproximadamente 2.900 organizaciones religiosas que representan aproximadamente a unos 30 grupos religiosos y cultos. Las organizaciones religiosas que desean obtener exención fiscal deben inscribirse en la Secretaría y presentar informes periódicos para mantener su situación. Entre los criterios que la Secretaría considera para determinar si concede o deniega la inscripción se encuentra el tener un lugar de culto, un organigrama, y clero que se haya ordenado. No se requiere inscripción para los servicios religiosos privados, como los que se realizan en una residencia privada, pero sí se requiere para toda actividad pública. Las organizaciones religiosas inscritas que deseen traer misioneros extranjeros deben presentar una solicitud a la Secretaría de Culto, que a su vez notifica a las autoridades de inmigración para que se expidan los

documentos correspondientes. Ninguno de los grupos informó que se hubieran negado visas a sus misioneros extranjeros.

La educación pública es laica. Sin embargo, los estudiantes pueden solicitar instrucción en la religión de su elección, la cual se puede impartir en la escuela o en una institución religiosa. Muchas iglesias y sinagogas dirigen escuelas privadas, incluidos seminarios y universidades.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo independiente del gobierno, que formalmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia (un decreto presidencial de marzo de 2005 transfirió la competencia del INADI del Ministerio de Interior al Ministerio de Justicia), está encargado de promover pluralismo social y cultural y de combatir las actitudes discriminatorias (ver la Sección III). El INADI, cuyo directorio cuenta con representantes de los principales cultos, investiga las infracciones a la ley de 1988 que prohíbe la discriminación por motivo de “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, posición económica, clase social o características físicas” y dirige programas educativos. Este organismo también ofrece apoyo a las víctimas y promueve medidas dinámicas para impedir la discriminación que incluyen la elaboración de un plan nacional para combatir la discriminación. En 2004, el INADI recibió nueve denuncias – siete anti-semíticas y dos anti-islámicas – que se determinó fueron discriminatorias por motivos religiosos.

En marzo de 2005, el INADI tomó conocimiento de que el Obispo Castrense Monseñor Antonio Baseotto había violado las leyes anti-discriminatorias con comentarios “peyorativos y desfavorables” realizados durante una homilía en una base militar en Octubre de 2004, en la que criticaba la inmigración musulmana en Europa.

El mismo obispo había generado una situación de tensión entre el gobierno y el Vaticano cuando, el 17 de febrero de 2005, envió una carta al ministro de Salud Ginés Gonzalez García diciendo que “quienes escandalizan a los niños antes deberían ser arrojados al mar con una piedra al cuello”. Este sentimiento – una referencia bíblica – fue utilizada para expresar la oposición del obispo a las políticas del Ministerio de Salud tendientes a favorecer la promoción de la distribución de preservativos y a las declaraciones del Ministro en favor de la despenalización del aborto. Para el gobierno, los comentarios del obispo aludían claramente a los “vuelos de la muerte” utilizados por el gobierno militar a fines de la década de 1970 y principios de la década del 1980 para deshacerse de los miembros del sector político de la izquierda y sus simpatizantes. El gobierno solicitó la inmediata remoción del obispo del cargo de Obispo Castrense, designado por el Vaticano. El Vaticano se negó a acceder a este pedido y el Gobierno unilateralmente retiró el acuerdo a la designación de Baseotto en el cargo de Obispo Castrense, lo que llevó a

numerosas autoridades de la Iglesia Católica a denunciar una campaña contra el catolicismo. Al finalizar el período abarcado por el presente informe, el conflicto entre el Gobierno y el Vaticano aún no se había resuelto.

El INADI continuó estudiando el caso de la legisladora de la ciudad de Buenos Aires Mirta Onega, quien fuera filmada en el año 2004 utilizando lenguaje peyorativo hacia un subordinado que profesaba la religión judía. La Legislatura porteña formó una comisión especial investigadora que recomendó una suspensión de 180 días para Onega, pero no se reunieron los votos suficientes durante la sesión plenaria para sancionar a la legisladora. El caso se encontraba pendiente al finalizar el período abarcado por el presente informe.

Para promover la armonía religiosa, la Secretaría de Culto envió representantes oficiales a varios acontecimientos entre ellos las conferencias sobre libertad de religión, la ordenación de rabinos, los servicios de Rosh Hashaná y la fiesta de Id Al Fitir, además de celebraciones religiosas de iglesias protestantes y ortodoxas.

Existen tres fiestas de guardar cristianas que se consideran feriado nacional: Viernes Santo, la celebración de la Inmaculada Concepción y Navidad. La ley también concede tres días de licencia paga y autorizada a los que guardan los días santos judíos de Año Nuevo, Día de la Expiación y Pascua, y también a los que guardan los días santos islámicos del Año Nuevo Musulmán.

Restricciones a la libertad religiosa

La política y la acción gubernamental contribuyeron a la práctica generalmente libre de la religión. Sin embargo, el gobierno otorga a la Iglesia Católica ciertos subsidios que no reciben otros grupos religiosos. Estos subsidios los administra la Secretaría de Culto y se calculan en \$4 millones por año y se han descrito como compensación por la expropiación de bienes que pertenecían a las instituciones católicas en tiempos de la colonia.

Varias organizaciones de iglesias católicas no cristianas cuestionaron la constitucionalidad del Registro Nacional de Cultos y expresaron su oposición a las regulaciones que requieren una previa aprobación del gobierno para establecer iglesias, la necesidad de presentar informes policiales de los funcionarios eclesiásticos, y la necesidad de registrar por separado cada nueva sede de una iglesia ya registrada y por lo tanto someterse a lo que consideran requisitos redundantes y burocráticos. En la segunda mitad de 2004 y nuevamente en febrero de 2005, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas presentó sus objeciones a la Secretaría de Culto, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, y presentó varias sugerencias para corregir o eliminar dichos requerimientos. Al finalizar el período abarcado por

el presente informe, la Secretaría aún no había tomado una decisión final respecto a las sugerencias de la federación.

No hubo informes sobre prisioneros ni detenidos por motivos religiosos.

Abusos por parte de grupos terroristas

En septiembre de 2004, un panel de 3 jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 absolvió a los 22 acusados argentinos de estar relacionados con el ataque terrorista de 1994 contra la Sede de la Comunidad Judía AMIA, en el que murieron 85 personas. El panel de jueces cuestionó la investigación del juez y fiscales originales de la causa, y ordenó una investigación sobre el manejo de la investigación y el juicio. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral reconfirmó la validez de los pedidos de arresto internacionales que pesan sobre 12 ciudadanos iraníes (incluido el ex embajador iraní en la Argentina al momento del ataque) y sobre un ciudadano libanés implicado en el ataque.

No hubo progresos en la investigación del ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992.

Conversión religiosa forzada

No hubo informes de conversión religiosa forzada, incluida la de ciudadanos estadounidenses menores de edad que habían sido secuestrados o sacados ilícitamente de los Estados Unidos, ni del rechazo de permitir que esos ciudadanos fuesen devueltos a los Estados Unidos.

Sección III. Actitudes sociales

La relación, generalmente amistosa, entre las religiones en la sociedad contribuyó a la libertad religiosa. No obstante, la discriminación religiosa, especialmente el antisemitismo, sigue siendo un problema. Las ONG promueven activamente el entendimiento entre los cultos. A las celebraciones religiosas importantes, como la conmemoración anual del Holocausto por parte de la comunidad judía, suelen asistir personas de diferentes religiones.

Entre las ONG que promueven la fraternidad religiosa están la Hermandad Argentino Judío-Cristiana, afiliada al Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), la Fundación de Educación para la Paz (FEDEPAZ) y la Federación de Entidades Argentino Árabes (América Latina), conocida como FEARAB. Ha habido una cooperación significativa entre FEARAB (América Latina), que representa musulmanes y cristianos de origen árabe, el Centro Islámico de la República Argentina y la DAIA, representación política de los judíos argentinos, para

impedir tensiones religiosas producto de conflictos políticos en el Medio Oriente.

La mayoría de los informes que se han publicado sobre actos contrarios a la religión tienen que ver con antisemitismo, no obstante hubo informes de actividades aisladas contra los musulmanes y cristianos. El INADI se esforzó para combatir la discriminación religiosa y otras formas de intolerancia (ver sección II).

Se conocieron varios informes sobre incidentes antisemíticos y contra la comunidad musulmana durante el período que abarca este informe. Según el informe anual sobre episodios antisemitas ocurridos en el país que elabora el Centro para Estudios Sociales de la DAIA, hubo 174 incidentes antisemíticos en 2004, cifra similar a la de los años anteriores. El informe también subraya la discriminación contra otros grupos, incluidos actos contra la comunidad musulmana. Entre los incidentes antisemíticos se encuentran el caso Onega (ver sección II), expresiones antisemíticas contra un rabino durante una disertación en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y actos de vandalismo en edificios y cementerios judíos. Asimismo, el informe de la DAIA destacó varios acontecimientos y acciones positivas, como la negativa del gobierno de otorgarle la personería jurídica al “Partido Nuevo Triunfo”, un grupo nacionalista del ala derecha formado por activistas antisemitas liderados por Alejandro Biondini y que con frecuencia enviaba mensajes antisemitas por medio de su página web.

Sección 4. Política del Gobierno de los Estados Unidos

El Gobierno de los Estados Unidos analiza los temas de libertad religiosa con el gobierno argentino como parte de su política general para promover los derechos humanos. Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos se reúnen periódicamente con varios dirigentes religiosos y están presentes en acontecimientos de las ONG y las organizaciones religiosas que abordan cuestiones sobre la libertad religiosa.

La Embajada sigue apoyando la investigación de la explosión de 1994 en la AMIA. Por ejemplo, el agregado jurídico sigue respondiendo a las pistas relacionadas con la investigación del incidente terrorista contra la AMIA que recibe del tribunal federal encargado de la investigación.

La Embajada asiste regularmente en la puesta en práctica de un proyecto educativo del gobierno relativo al Holocausto, bajo los auspicios del Grupo Internacional de Educación sobre el Holocausto (ITF).